

Trabajo Fin de Grado

Ética y corrupción en España

Problemática, medios de comunicación y posibles remedios ante un futuro sombrío

Autor/es

Verónica Viñés Pardo

Director/es

Manuel Calvo García

Facultad de Derecho

2016

*~ El cómplice del delito de corrupción es frecuentemente
nuestra propia indiferencia.*

Bess Myerson.

Índice

Abreviaturas.....	4
Introducción.....	5
1. El fenómeno de la corrupción en España	7
1.1. Marco conceptual.....	7
1.2. Causas principales.....	10
1.3. Notas distintivas de la corrupción en España, algunos datos.....	13
1.4. La financiación legal e ilegal de los partidos políticos en España. Regulación y evolución.....	15
1.5. Papel de los medios de comunicación en la transmisión de la información....	18
2. Ética y política frente a la corrupción	23
2.1. ¿Podemos relacionar la ética y la política?	23
2.2. La corrupción y los derechos humanos.....	27
2.3. Transparencia, principal remedio jurídico frente a la corrupción.....	31
Conclusiones.....	33
Bibliografía.....	37

Abreviaturas

AROPE	At Risk Of Poverty and Exclusion
CE	Constitución Española
CGPJ	Consejo General del Poder Judicial
CIS	Centro de Investigaciones Sociológicas
CiU	Convergència i Unió
CUP	Candidatura d'Unitat Popular
ETA	Euskadi Ta Askatasuna
GAL	Grupo Antiterroristas de Liberación
GRECO	Grupo de Estados Contra la Corrupción
INE	Instituto Nacional de Estadística
LOFPP	Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos
ONG	Organización No Gubernamental
PGE	Presupuestos Generales del Estado
PIB	Producto Interior Bruto
PNV	Partido Nacionalista Vasco.
PP	Partido Popular
PSOE	Partido Socialista Obrero Español
TSJ	Tribunal Superior de Justicia
UNDP	United Nations Development Program

Introducción

El término corrupción que utilizaremos en el presente trabajo hace referencia al abuso de poder en el sector público para beneficio esencialmente privado, bien sea de forma directa o indirecta, con incumplimiento de normas jurídicas¹. Por ello, no haremos referencia a la corrupción en el ámbito privado, centrándonos fundamentalmente en la corrupción política.

En España, la multitud de escándalos de corrupción que traen como consecuencia la desconfianza institucional unida a una extensa crisis económica nos lleva a analizar el tema de la corrupción en profundidad para tratar de entender qué nos has llevado a la situación en la que nos encontramos actualmente.

La corrupción política ha nacido y crecido al amparo de la financiación de los partidos políticos para posteriormente generar otras formas de corrupción. El problema de la corrupción nació con la entrada de la democracia, concretamente en 1982 cuando el Partido Socialista concentró en sus manos el poder tanto estatal, autonómico como municipal. Sin embargo, esta situación se irá generalizando con la alternancia de los diferentes partidos políticos en el poder. El cambio de valores éticos, la descentralización del poder político, la concentración de información oficial y la degradación de fundamentos ideológicos conllevarán a un desarrollo exponencial de esta situación.²

A raíz de esta situación, puede imaginarse la multitud de figuras y variedades que aparecen, siendo algunas de ellas: el cohecho (artículos 419 a 427 del Código Penal), el fraude (artículo 436 del Código Penal), las actividades prohibidas (artículo 441 del Código Penal), el tráfico de influencias (428 del Código Penal), la malversación de caudales públicos (432 a 435 del Código Penal) o el uso de información privilegiada (artículo 442 del Código Penal).

Como puede imaginarse, existen más variedades de corrupción pero que por motivos de extensión es imposible comentar, por lo que hemos hecho referencia a las más

¹ VILLORIA MENDIETA, MANUEL: «La corrupción en España», *Revista de Servicios Sociales y Política Social*, volumen XXXII, 2015, pp. 77-100.

² ZARZALEJOS, JOSÉ ANTONIO: «Descripción del fenómeno de la corrupción», en *Corrupción y ética*, Bilbao: Universidad de Deusto, 1996, pp. 12-17.

conocidas. Centrándonos en los Partidos Políticos se han dado casos de corrupción prácticamente en cada uno de ellos con el paso del tiempo. Por ejemplo, dentro del Partido Popular podemos citar el Caso Bárcenas (con Ángel Acebes, Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas o Ángel Sanchís como imputados), las Tarjetas B (con Rodrigo Rato), el Caso Brugal, el Caso Palma Arena (Jaume Matas), el Caso Gürtel (con numerosos imputados), el Caso Fabra o el Caso Púnica como algunos de los claros ejemplos de que la corrupción es una realidad en nuestros tiempos. Por supuesto, no solo existe corrupción en el Partido Popular ya que debemos recordar el Caso Filesa en el PSOE que junto con Malesa y Time-Export recibieron varios millones por elaborar estudios de asesoramiento que nunca realizaron reinvirtiéndose este dinero en las arcas del Partido Socialista; el Caso Casinos en CiU o el Tragaperras en el PNV.³ Y no solo hay corrupción en política ya que también es corrupción cuando un médico receta un tratamiento para obtener beneficios o cuando un sacerdote se niega a casar a una pareja de etnias diferentes o incluso cuando un policía amaña pruebas en contra de un delincuente para que lo condenen.⁴

En el presente trabajo se analizarán las causas que nos han llevado a esta situación, además de caracterizar la corrupción existente apoyándonos en algunos datos reales para una mejor comprensión de la situación. Se profundizará además en dos temas muy importantes en la actualidad como son por un lado, la financiación tanto legal como ilegal de los partidos políticos, tan polémica en los últimos años y por otro, cómo los medios de comunicación transmiten la información y en cierta forma la manipulan, dependiendo tanto de su ideología como de si se han visto influidos por los políticos.

No podemos olvidarnos de la importante perspectiva ética que viene unida a la corrupción, por lo que en una segunda parte del trabajo trataremos de establecer si existe o no una relación entre política y ética y expondremos cómo se ven afectados negativamente los Derechos Humanos por la corrupción. Para finalizar, plantearemos una serie de soluciones a esta situación, ya que pese a que están en manos de todos los políticos ninguno las ha llevado a cabo cuando ocupan el poder.

³ ORDOÑEZ PÉREZ, DAVID: «La financiación de los partidos políticos en España: corrupción y deslegitimación», *Estudios*, nº2-2, 2012, pp. 19-26.

⁴ SALCEDO MEGALES, DAMIÁN: «Mala praxis, corrupción y juicios de ética profesional», *Las Torres de Luca*, nº 1, 2012, pp. 115-146.

1. El fenómeno de la corrupción en España

1.1. Marco conceptual

España fue el último país de Europa occidental en adoptar un sistema democrático tras la Segunda Guerra Mundial. La transición política de una dictadura a un sistema democrático ha supuesto la crisis actual en la que se encuentra nuestro sistema institucional.

Estos problemas institucionales provienen de una Corona marcada por la dictadura, Cortes pobladas por representantes de estructuras políticas débiles y con dos Cámaras que nacieron de la transición. Un ejecutivo marcado por demasiadas personas procedentes del «bando azul» del régimen anterior, reconvertidos en «demócratas» y un Poder Judicial quizá excesivamente dependiente del ejecutivo. El sistema institucional no fue creado «ex novo» sino condicionado por el sistema anterior. Las instituciones así generadas dificultan el control, además de favorecer la opacidad y con ello el abuso de poder y la corrupción⁵.

Partiendo de estas bases, para analizar el tema de la corrupción debemos definir qué se entiende por corrupción, ya que dicho concepto ha suscitado gran problemática llegando incluso a generar problemas de validez en las investigaciones que no lo abordan correctamente. Por ello, definiremos el concepto de forma amplia, intentando abarcar la mayoría de perspectivas posibles atendiendo a criterios jurídicos, éticos/morales, desde una perspectiva socio-antropológica, e incluso económica-institucional.

En primer lugar, podemos definir la corrupción desde una perspectiva jurídica, suponiendo para el *derecho* corrupta «toda acción u omisión realizada por un actor público que incumpla las normas jurídicas y viole las obligaciones del cargo con abuso de posición y la finalidad de obtener beneficios privados personales o para un grupo del que forma parte el corrupto»⁶. Existe, corrupción sancionable administrativamente y

⁵ JIMÉNEZ ASENSIO, RAFAEL: «España, ¿un país sin frenos?» en *La corrupción en España: ámbitos, causas y remedios jurídicos*, Barcelona, Atelier, 2016, pp. 17-46.

⁶ VILLORIA MENDIETA, MANUEL: «Corrupción pública», *Eunomía, revista en cultura de la legalidad* nº 5, 2014, pp. 159-167.

penalmente, la diferencia básica es que cuando la incidencia en el orden o el desprestigio institucional no alcance niveles de gravedad suficiente, podría darse el caso que esas actuaciones no conlleven responsabilidad penal pero sí sancionables administrativamente. También cabe decir que no toda conducta disciplinariamente tipificada como sancionable tiene por qué ser corrupta. Como vemos, esta definición de corrupción deja fuera situaciones que serían rechazadas moralmente. Existe por tanto, por un lado, lo que llamamos corrupción jurídica (sancionada por normas jurídicas) y por otro, corrupción moral (sancionada por concepciones ético-sociales dominantes).⁷

Respecto a la corrupción moral, que como hemos dicho es sancionada por *concepciones ético-sociales*, se podría definir la corrupción como toda acción en la que el responsable público pone por delante el interés privado sobre el interés general aunque no incumpla ninguna ley.

Pero no podemos quedarnos solo con una visión jurídica y ética, ya que para definir de forma completa el fenómeno de la corrupción, debemos de tener en cuenta otras disciplinas como la sociología o la economía. Desde una perspectiva *socio-antropológica* la corrupción es la exclusión de grupos del acceso a las decisiones políticas o a los recursos económicos, lo que hace de la corrupción un sistema político informal, integrado al sistema político.⁸

Y en lo que respecta a la *economía institucional* no aporta grandes diferencias con la anterior. Se debe de dar un abuso por parte del agente de la posición que le encarga ocupar el principal, poniendo por delante el interés propio del agente. La diferencia principal es que aquí los seres humanos actúan normalmente como actores racionales que buscan maximizar sus preferencias, por lo que se acepta que son naturalmente egoístas. Aquí es conocida la ecuación $C = M + D - A$ de Robert Klitgaard (1988). Es decir, la corrupción equivale al monopolio de decisión más la discrecionalidad menos la rendición de cuentas.

Otros autores sin embargo, critican las aproximaciones moralistas por lo que introducen una *concepción histórica y sociológica* que se vincula básicamente a la

⁷ SORIANO, RAMÓN: «La corrupción política: tipos, causas y remedios», *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, N° 45, 2011, pp. 382-402.

⁸ CARASSALE, SANTIAGO: «Corrupción», *Eunomía. Revista en cultura de la legalidad*, n°4, 2013, pp. 172-178.

percepción social del fenómeno, por lo que el concepto de corrupción podría variar en función de cómo la sociedad lo perciba en dicho instante.

Otro apunte importante para la definición de corrupción es la existencia de la corrupción tanto en regímenes democráticos como en regímenes dictatoriales. En mi opinión, en las democracias, la situación política se hace más transparente y cognoscible gracias a los medios de comunicación que transmiten la información de los casos de corrupción a la ciudadanía, pero esto no quiere decir que el índice de casos sea mayor, sino solo será mayor su conocimiento y percepción. Las dictaduras sin embargo, crean situaciones idóneas para el desarrollo de la corrupción al haber mayor descontrol y ocultismo y por consiguiente, mayor sentimiento de impunidad. E. Lamo Espinosa plasma esta situación en una frase que nos parece interesante traer a colación llegados a este punto, que es la siguiente: *«en las dictaduras no hay propiamente corrupción; ella misma es la corrupción institucionalizada»*.

Para dar una última pincelada al concepto de corrupción debemos de hacer también referencia a las *diferentes tipologías* de corrupción que los estudiosos de la misma suelen citar: corrupción blanca, gris y negra. La corrupción blanca es la consentida por la sociedad, la gris la que unos consienten y otros rechazan y como ya os imaginaréis, la corrupción negra es la que todos rechazan.

Estas tipologías nos llevan a pensar en un componente dinámico de la corrupción ya que en función de la variabilidad de su percepción social, el concepto puede variar, siendo difícil encasillar un caso en un tipo determinado.

Por tanto, intentando unir todas las perspectivas anteriores, podemos definir ya el término *corrupción* como un abuso de poder con un beneficio indirecto o directo para el corrupto o los grupos de los que forma parte éste, con incumplimiento de normas jurídicas o de las normas éticas que una comunidad asume como válidas, y donde el actor corrupto siempre pone por delante el interés privado sobre el interés general, existiendo tanto en regímenes democráticos como en regímenes dictatoriales, dependiendo la gravedad de la misma de los propios dirigentes del sistema.

Una vez que hemos esclarecido el término corrupción ya podemos pasar a analizar los factores determinantes de la misma y así intentar entender el porqué de esta situación.

1.2. Causas principales.

La corrupción política como argumentan la mayoría de autores, ha sido causada principalmente por motivos económicos, sociales, políticos e incluso psicológicos, pero también haremos referencia a continuación, al propio ordenamiento jurídico español que si bien no suele tenerse en cuenta por los grandes estudiosos de la materia, creemos que está facilitando en cierta forma el desarrollo de la corrupción. Además no hay que olvidar la crisis institucional que perdura en España, como hemos comentado anteriormente y que también la consideramos como causa de la misma.

En general, se pueden dividir en tres las causas de la corrupción: económicas, sociales y políticas⁹. En el orden *económico* se pueden destacar las políticas sociales en las que los políticos son los encargados de la selección de demandas sociales; la privatización del sector público y la descentralización de actividades públicas transferidas a comunidades y entes locales sin un marco jurídico de control, influyendo además los valores del capitalismo y las técnicas de cálculo de costes que han sido favorables a quien hace uso de la corrupción.¹⁰

Además, en el orden *social* la falta de moral pública y la crisis general de los valores, impiden la construcción de un sistema generalizado de moral.

En el orden *político* sin embargo, las causas de la corrupción política residen en la balcanización del poder o el incremento de la autonomía de los grupos, la creación o potenciación del espíritu de facción, la pérdida de la fe en el poder político en el Estado al perderse los valores legal-rationales que lo legitiman, la crisis del concepto de representación y de la idea clásica de libertad de expresión y la tendencia actual a la invisibilidad del poder.¹¹

No solo son importantes las causas económicas, sociales y políticas, ya que la corrupción es ejercida por un individuo concreto y por ello es necesario tener en cuenta

⁹ Para el desarrollo de las causas económicas, sociales y políticas nos hemos basado en el capítulo del libro: PECES BARBA, GREGORIO: «La corrupción en las Instituciones y en la sociedad civil» en: *Corrupción y ética*. Bilbao: Universidad de Deusto, 1996, pp. 19-28.

¹⁰ SORIANO, RAMÓN: «La corrupción política: tipos, causas y remedios». *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, Nº 45, 2011, pp. 382-402.

¹¹ PECES BARBA, GREGORIO: «La corrupción en las Instituciones y en la sociedad civil» en: *Corrupción y ética*. Bilbao: Universidad de Deusto, 1996, p.26.

razones puramente *psicológicas*¹² que posee el individuo y lo lleva a actuar de forma corrupta. En este punto debemos de hacer referencia a la conducta narcisista inherente a los políticos, ya que hoy en día no actúan para conseguir el interés general que es lo que tendrían que buscar, sino que de acuerdo con la opinión de Anthony Downs «*los partidos, más que buscar el poder para llevar a cabo políticas preconcebidas, diseñan políticas para obtener el poder*».

Los elementos psicológicos de una persona narcisista son básicamente la arrogancia, la inferioridad, la necesidad de reconocimiento y superioridad, la hipersusceptibilidad, la angustia, la falta de empatía, la amoralidad, la irracionalidad e incluso la inflexibilidad y la paranoia. Rasgos característicos de nuestros políticos actuales, por lo que se puede atribuir dicho narcisismo a una de las causas de la corrupción actual. Dato interesante es que otro rasgo característico de los políticos y directivos narcisistas es que pueden llevar a organizaciones e incluso al gobierno a fracasar en periodos de crisis económicas, como la que llevamos sufriendo desde 2007.

Como hemos dicho, estas son las causas principales de la corrupción, pero debemos prestar atención también al *ordenamiento jurídico español*, porque si bien no es una causa perceptible a primera vista, puede influir notablemente en el desarrollo de la corrupción y ser implícitamente una causa de la misma ya que, nuestro ordenamiento afronta el fenómeno de la corrupción de forma disruptiva y asistemática, conteniendo normas todavía corruptivas o tolerantes con usos y costumbres corruptas y además, ciertas medidas adoptadas en los últimos tiempos son más discursivas que eficaces.¹³

Explicaremos brevemente lo que queremos decir en el párrafo anterior. La Constitución ya contiene un completo código de conducta de los poderes públicos, existiendo también la Ley de Transparencia y Buen Gobierno o la Ley de Ejercicio del Alto Cargo, por lo que ¿de qué sirve seguir proclamando las cualidades ideales si no se procura que se cumplan o no se distancien de su deber? Actualmente las medidas para combatirlas son parciales y desconexas, se adoptan a saltos y sin diagnóstico previo, ni de

¹² Sobre las causas psicológicas así como para la argumentación narcisista, nos basamos en el artículo de: DELGADO GODOY, LETICIA M.: «Narcisismo y representación democrática en España», *Methaodos. Revista de ciencias sociales*, nº 3, 2015, pp. 49-63.

¹³ Vid. VAQUER CABALLERÍA, MARCOS: «Corrupción pública y ordenamiento jurídico», en *La corrupción en España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos*, Barcelona: Atelier, 2016, pp. 125-138.

seguimiento o evaluación de sus efectos, y para comprobarlo solo hay que pensar en la evolución del Derecho público estatal en la última década.

Además, mientras el legislador proclama combatir la corrupción y perseguir la regeneración democrática de las legislaciones el ordenamiento todavía mantiene normas que contradicen estas metas. Un ejemplo de ello es el *lobbying*, ya que cuando todo favor o regalo en reconocimiento a su servicio debería estar prohibido, se le ha dado cobertura legal expresa, y además el Tribunal Supremo así lo reconoce en su jurisprudencia, que viene a establecer básicamente que la aceptación de regalos de cortesía profesional no sólo no está prohibida, sino que tampoco es causa de abstención para dictar resoluciones favorables al obsequiado.

Por otro lado, las reformas legales que se han impulsado para combatir la corrupción plantean dudas de eficacia. Ejemplo de ello serían las incompatibilidades durante el ejercicio del cargo público y las limitaciones temporales tras su cese para evitar el fenómeno de puertas giratorias, pero que actualmente la experiencia previa en el sector se considera un mérito de idoneidad sin excepción.

Como vemos, por esta serie de causas económicas, sociales, políticas, psicológicas e incluso legales, la corrupción se ha ido convirtiendo en una realidad de nuestra época y como toda realidad, podemos comentar una serie de notas que la han ido caracterizando y que hoy en día ya podemos decir que se tratan de notas distintivas de la corrupción española, aportando además una serie de datos de la Fiscalía o el Consejo General del Poder Judicial para visualizar más fácilmente la situación.

1.3. *Notas distintivas de la corrupción en España, algunos datos.*

Como hemos dicho, debido a la magnitud que ha alcanzado la corrupción política podemos establecer una serie de *notas distintivas sobre la corrupción en España* para entender un poco mejor la corrupción en nuestro país y así ir desgranando la problemática existente.¹⁴

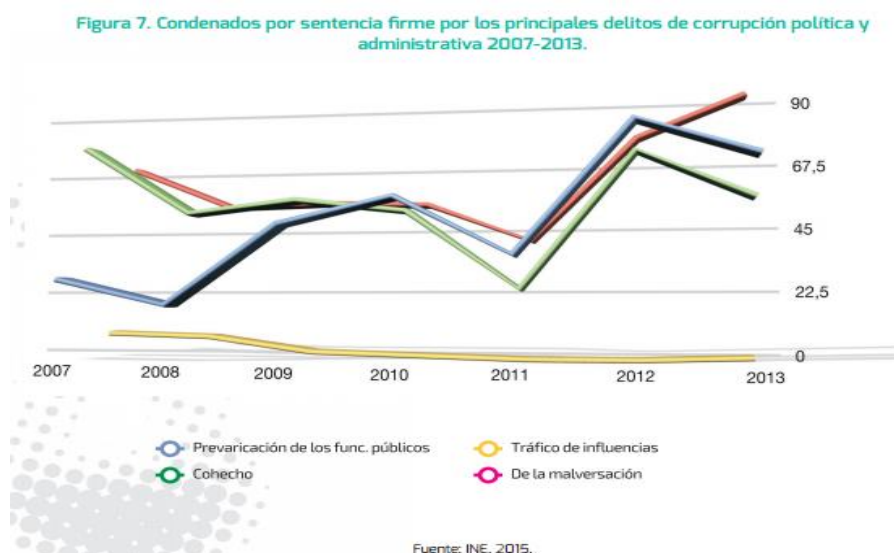
En primer lugar, España *no* tiene un problema de *corrupción sistémica* (el mayor grado de corrupción que se puede dar), ya que pese a que su medición es compleja, se han llevado a cabo análisis bien objetivamente a través de denuncias de corrupción y las investigaciones abiertas; o a través de encuestas de percepción de corrupción tanto a inversores, extranjeros o ciudadanía en general; e incluso a través de encuestas a los ciudadanos sobre sobornos. Actualmente hay quince instrumentos de medición cada vez más sofisticados (UNDP y Global Integrity)¹⁵, que han llevado a establecer que no estamos en el mayor grado de corrupción posible.

Aunque el problema no sea de corrupción sistémica, sí que España tiene un *problema serio de corrupción política*. De acuerdo con datos obtenidos en la prensa, más de 600 municipios españoles tienen algún caso de corrupción investigado. Parece que esto es debido a que nuestros políticos tienen demasiado poder en la toma de decisiones, siendo la percepción por parte de los ciudadanos muy elevada, dato éste muy importante. Según el Eurobarómetro somos los europeos que perciben más corrupción entre los partidos (84%) y entre los políticos (72%). Sin embargo, también hay que decir que ahora hay menos corrupción de la que había en la época de crecimiento, ya que la percepción de la misma bajaba pero los casos descubiertos con posterioridad demuestran que esa es una de las épocas más corruptas de la historia de España. Concentrándose los mayores niveles de corrupción en el nivel local y en el autonómico (por razones de urbanismo, cuyo análisis no es objeto de este trabajo).

¹⁴ Para el desarrollo de las notas distintivas de la corrupción española nos hemos basado principalmente en dos textos complementarios, por un lado: VILLORIA MENDIETA, MANUEL: «Principales Rasgos y características de la corrupción en España» en *La corrupción en España: ámbitos, causas y remedios jurídicos*. Barcelona: Atelier, 2016, pp 47-66, y además: VILLORIA MENDIETA, MANUEL: «La corrupción en España», *Servicios sociales y Política Social*, vol. XXXII, 2015, pp. 77-100.

¹⁵ UNDP (United Nations Development Program) and Global Integrity (2008): *A User's Guide to Measuring Corruption*. Oslo, UNDP Oslo Governance Center.

A partir de estas notas distintivas, trataremos de visualizar con *datos reales*¹⁶ cómo ha afectado la corrupción en los últimos años. Para ello extraeremos una serie de datos objetivos que se poseen del CGPJ, del Ministerio de Interior y de la Fiscalía General del Estado. De los datos de la Fiscalía se extrae que de 2011 a 2014, en 2014 es el año con más investigaciones por delitos relacionados con la corrupción. Concretamente la prevaricación es el delito más investigado probablemente por ser el más general, seguido de la malversación de caudales públicos. Existen además indicios para relacionar los periodos electorales y las acciones judiciales en materia de corrupción ya que en 2014 el número de calificaciones ha disminuido respecto a 2013, como se puede observar en el gráfico facilitado por el INE.



Vemos cómo las condenas firmes descienden en 2008 y 2011 ambos años de celebración de elecciones generales. Por comunidades, la Fiscalía calificó a Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias como comunidades donde más causas abiertas se dan por corrupción.

Por lo que, España actualmente tiene un problema importante de corrupción pero sin llegar a presentar niveles de corrupción sistémica, si presentando datos preocupantes

¹⁶ Sobre estos datos: TARÍN, CARLOTA: «La medición de la corrupción en España: los datos objetivos» en *La corrupción en España: ámbitos, causas y remedios jurídicos*. Barcelona: Atelier, 2016, pp. 67-82.

a nivel de corrupción política siendo además la percepción ciudadana de esta situación una de las más elevadas de Europa.

En todo este entramado, debemos analizar cómo los partidos políticos obtienen financiación y cómo en cierta forma la manipulan para llegar a la situación en la que se encuentran. Cabe decir también que el tema de la financiación hoy por hoy es muy problemático como veremos a continuación.

1.4. La financiación legal e ilegal de los partidos políticos en España. Regulación y evolución.¹⁷

Por financiación de los partidos entendemos el conjunto de métodos que estos utilizan para recaudar fondos que les permitan afrontar sus gastos como organizaciones y las campañas electorales. Estos fondos se obtienen a través de la recaudación de las cuotas de afiliación, de los aportes voluntarios de individuos o empresarios en formas de donaciones corporativas y por medio de subvenciones públicas.¹⁸

Desde que se instauró la democracia, se tuvo que ampliar la financiación a una financiación directa, porque con las cuotas de los afiliados y militantes no había suficiente. Desde un principio, la ley 20/1977 y la Ley 54/1978 fijaron la responsabilidad del Estado de financiar a estas organizaciones y ya con la Ley Orgánica 3/1987 sobre financiación de los partidos políticos (LOFPP) se permitió la financiación privada con algunas limitaciones, concretamente se optó por un sistema público fijando un tope del 5% de ingresos privados sobre el total de lo contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Posteriormente las leyes dotaron de un amplio marco legal a todo el conglomerado de subvenciones. Esta situación conllevó un aumento del gasto público y que se hiciera latente la financiación ilegal, por lo que se aprobó la Ley Orgánica 8/2007

¹⁷ Sobre la financiación de los partidos políticos nos hemos basado en: RIDAO MARTÍN, JOAN. «La transparencia y el control económico-financiero de los partidos políticos en España. Entre un balance decepcionante y un futuro sombrío». *Cuadernos Manuel Giménez Abad*, nº 7, 2014, pp. 211-248, y: ORDÓÑEZ PEREZ, DAVID. «La financiación de los partidos políticos en España: corrupción y deslegitimación», *Análisis*, nº 2-2, 2012, pp 19-26.

¹⁸ RIDAO MARTÍN, JOAN. «La transparencia y el control económico-financiero de los partidos políticos en España. Entre un balance decepcionante y un futuro sombrío». *Cuadernos Manuel Giménez Abad*, nº 7, 2014, p. 211.

sobre Financiación de los Partidos Políticos que intentó aumentar la transparencia y evitar la corrupción pero todavía sin conseguir llegar a erradicar como sabemos tal situación.¹⁹

Ahondado en el tema. Concretamente en España la financiación se obtiene por subvenciones directas, gastos electorales, gastos de representación y funcionamiento y subvenciones indirectas a través de fundaciones y otros organismos ligados a los partidos políticos. Con estas vías en un principio parecía que iba a ser suficiente, pero no lo fue. ¿Cómo es posible? Hay que tener en cuenta que no existen fuentes fiables a excepción del Tribunal de Cuentas que nos den una estimación fiable sobre los ingresos de las organizaciones políticas, por lo que no podemos saber con exactitud a qué se destinan sus ingresos.

En 2007 se llevó a cabo una reforma dirigida a fijar un umbral máximo y dar publicidad a los donativos privados, sin poner límite a los mismos. Gracias a esta reforma se dejó al descubierto muchas zonas opacas, obligando asimismo a los donantes a identificarse, además de prohibir a las empresas a realizar donaciones (aunque por presiones de los partidos la ley contuvo numerosas excepciones en las que sí que se podía).

La modificación de 2012 trató de adecuar las subvenciones que reciben los partidos a un contexto de crisis económica. Ninguna entidad de crédito podría condonar más de 100.000€ y los partidos políticos se vieron obligados a notificar al Tribunal de Cuentas las donaciones que superaran los 50.000€. Sin embargo, todavía persisten «defectos técnicos u omisiones en la ley» ya que desde la entrada en vigor de la reforma de 2012 es posible donar dinero sin límite alguno a las fundaciones de los partidos políticos, y por ende, a los partidos políticos. También pese a que se encuentre prohibido que terceras personas asuman el coste de las adquisiciones de bienes, obras o servicios de los mismos, en el apartado 4 de la DA 7ª de LOFPP se abren las puertas a las entregas monetarias (aparentemente no donaciones) anónimas a las fundaciones.

En lo relativo a la *rendición de cuentas*, no se ha avanzado gran cosa. Los partidos deben prever un sistema de control interno que garantice la intervención y la contabilización de actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, correspondiendo al Tribunal de Cuentas el control de la actividad

¹⁹ ORDÓÑEZ PEREZ, DAVID. «La financiación de los partidos políticos en España: corrupción y deslegitimación», *Análisis*, nº 2-2, 2012, p.21.

económico-financiera de los mismos sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas.

A lo largo del tiempo la financiación indirecta de los grupos terroristas se ha encontrado en el punto de mira del legislador ya que se han dado casos de apoyo de algunas formaciones políticas a ETA contribuyendo a la defensa y justificación de sus acciones. Para evitar esta situación se previó la autorización a los órganos judiciales la suspensión de la entrega de subvenciones a los partidos que se encontraban afectados por un proceso de ilegalización.

Para prevenir el problema de financiación, el Consejo de Europa creó el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO). Sin embargo, ya fue en 2009 cuando se emitió un informe señaló que «España, el público en general y los medios de comunicación solo tienen acceso a la información global y que aparece tarde en el proceso, por lo que es dudoso que la información publicada por el Tribunal de Cuentas sea suficientemente significativa para ayudar a identificar vínculos económicos cuestionables y la posible corrupción en el sistema de financiación de los partidos». Ante una situación así en la que ya prácticamente no existe información, el problema se agrava.²⁰

Aun así, frente a esta situación el Consejo de Ministros intentó actuar aprobando el Proyecto de la Ley Orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos. El texto propone modificar la LOFPP, y la Ley Orgánica de Partidos Políticos y La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, finalmente aprobado por la Ley 3/2015 de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos de 30 de marzo.

Se establecen nuevas obligaciones en la gestión de recursos de los partidos y un régimen más estricto de la rendición de cuentas bien sea por un aumento de control o mediante la introducción de obligaciones económicas. Concretamente las primeras medidas a adoptar son:

- ◆ Prohibición de donaciones procedentes de personas jurídicas
- ◆ Prohibiciones de condonación de deuda.

²⁰ RIDAO MARTÍN, JOAN. «La transparencia y el control económico-financiero de los partidos políticos en España. Entre un balance decepcionante y un futuro sombrío». *Cuadernos Manuel Giménez Abad*, nº 7, 2014, p. 212

- ◆ Exigencia de que presenten sus cuentas anuales y la publicación de las mismas en sus páginas web.
- ◆ El Responsable de la gestión económica-financiera de cada partido deberá comparecer ante el Parlamento anualmente.
- ◆ Se propone el registro de fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos.
- ◆ Devolución de donaciones indebidas.

Curiosamente, siguen sin prohibirse que las fundaciones acepten o reciban donaciones de empresas privadas que presten servicios o realicen obras para las administraciones públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público. Ni se aumenta el plazo de prescripción de las infracciones teniendo en cuenta el retraso con el que el Tribunal de Cuentas aprueba los informes, siendo conveniente también la reforma inexistente del Tribunal de Cuentas.²¹

En resumen, para mejorar algo la situación actual española sobre financiación de los partidos políticos es conveniente el desarrollo de políticas de transparencia que sean efectivas. Por ello surgió la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que se comentará a lo largo del trabajo.

1.5. Papel de los medios de comunicación en la transmisión de la información.

Hoy en día los medios de comunicación son un arma muy potente cuando se relacionan con la corrupción, por lo que intentaremos explicar a continuación cómo los medios magnifican en muchos casos la situación real y cómo además en función de su ideología descubren o tapan los casos de corrupción.

²¹ RIDAO MARTÍN, JOAN. «La transparencia y el control económico-financiero de los partidos políticos en España. entre un balance decepcionante y un futuro sombrío». *Cuadernos Manuel Giménez Abad*, nº7, 2014, p. 220.

Como hemos señalado anteriormente, la percepción de los españoles sobre la corrupción es muy elevada y ello en cierta medida es consecuencia de los medios de comunicación y en la forma en que denuncian la situación existente, exagerando en muchas ocasiones el tema de la corrupción.

El artículo 20 de la Constitución Española consagra el principio de libertad de prensa, reconociéndose la libertad de expresión, la creación artística y científica, la libertad de cátedra y el derecho a la información, prohibiéndose además la censura previa. Durante los siglos XIX y XX se introdujo la idea de la prensa como perro guardián (*watchdog*) de los derechos y libertades de la sociedad a la que sirve, encomendándose cierta labor de vigilancia del poder y los posibles abusos. Cumpliendo con su papel de guardianes, los medios hacen avanzar reformas y ayudan a crear una cultura de discursos cívicos, transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos.²²

Pueden actuar como una fuerza contra la corrupción en dos sentidos. Pueden aportar resultados (ciertos) con la publicación de casos de corrupción que puede conllevar la apertura de una investigación oficial, la dimisión de un político... Pero también pueden crear un clima de pluralismo, debate y rendición de cuentas.

Parece que hasta ahora la influencia de los medios de comunicación es positiva siempre, no siendo así, como veremos a continuación.

Normalmente, estos medios proporcionan una serie de marcos interpretativos, la presentación de los personajes suele responder a una serie de patrones: víctimas-villanos, nosotros (ético) - ellos (inmoral), utilización de ironías, apodos o incluso viñetas. Todas ellas con un alto grado de dramatización de las noticias sobre los escándalos políticos.

Unos medios de otros, se diferencian por las diferentes líneas editoriales en función de la cercanía o distancia previa del medio con respecto al actor principal del escándalo de corrupción, que en función de quien sea, organizan sus noticias con la intención de aumentar o disminuir el caso concreto. Esta conducta no pasa desapercibida al corrupto que posteriormente querrá influir sobre los medios de comunicación como parte de la estructura de su acción jurídicamente ilícita o de contravención de la ética democrática.

²² ARTERO MUÑOZ, JUAN PABLO. «Medios de comunicación, derecho a la información y corrupción», en *La corrupción en España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos*, Barcelona: Atelier, 2016, pp. 109-124.

Bien es sabido que a raíz de esto los poderes públicos intentan favorecer a grupos de comunicación afines, como ha sucedido en diversos casos de concesiones de emisoras de radiodifusión y de canales de televisión digital terrestre para construir grupos nuevos.

Para esclarecer el tema, cuando se desencadenó la actual crisis económica, la deuda que acumulaban algunas radiotelevisiones públicas era muy elevada. ¿Cómo se había originado semejante cantidad de deuda? Básicamente por la gubernamentalización del servicio de radiotelevisión que atendía de forma prioritaria a la transmisión de contenidos ideológicos. Pongamos un ejemplo bien claro, la radiotelevisión valenciana manipulaba los servicios informativos, los contenidos informativos dedicados a política duplicaban a los de TV1, la estructura interna de los informativos se encontraba más politizada e intentaba ocultar su politización y además ocultaba también lo que no resultaba favorable al gobierno o partido que lo sustentara.

Los entes radiotelevisivos autonómicos, en mayor medida que los estatales han estado implicados en casos de corrupción como marionetas de los gobiernos que los controlan. En este sentido muchos de ellos devienen como colaboradores innecesarios, pero totalmente efectivos de la corrupción y por ende de la opacidad gubernamental.

Y no es que solo el dinero público vaya a parar a los propios medios de comunicación, sino que parará también en los propios periodistas, siendo aquí de vital importancia la *ética periodística*, ya que los políticos saben que junto con el poder judicial, los medios de comunicación son los principales vehículos para la denuncia y percepción de la corrupción en la ciudadanía.

Como ya Bobbio afirmó en 1985, «*un Estado tiene mayor o menor democracia según sea la extensión del poder visible respecto del invisible*»²³, por lo que vemos el papel vital de los medios en todo el tema de corrupción. Éstos pueden llevar a cabo una serie de acciones para combatir la corrupción política actual, por medio de:

²³ Citado por ARTERO MUÑOZ, JUAN PABLO. «Medios de comunicación, derecho a la información y corrupción», en *La corrupción en España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos*, Barcelona: Atelier, 2016, p. 120.

- ◆ Aplicación de reglas de transparencia.
- ◆ Vigilancia sobre los gobiernos, empresarios, actividades de lucro.
- ◆ Foros de debate amplios.
- ◆ Negación de asistir a conferencias de prensa si no se admiten preguntas.
- ◆ Denuncia de sobresueldos (provenientes de entidades públicas) por parte de compañeros.
- ◆ Ser conscientes de que el neopopulismo o populismo en condiciones neoliberales busca el desprestigio de la política.
- ◆ Tanto la corrupción política es erosiva de la democracia pero también la pequeña corrupción lo es.²⁴

Por poner otro ejemplo y no basarnos solo en medios radiotelevisivos autonómicos, podemos analizar la cobertura mediática de los escándalos de corrupción en España por los principales periódicos como son El País o El Mundo y ver también como en función de la ideología de los diferentes medios de comunicación se producen diferencias importantes.

Si se analizan las portadas de El País y el Mundo se pone de manifiesto que ambos periódicos realizan una cobertura distinta y más si se trata del PP o PSOE. La atención evoluciona con irregulares subidas y bajadas adquiriendo mayor protagonismo los escándalos en la segunda mitad de los 90 (por los GAL) y en 2009 (caso Gürtel), realizando El Mundo mayor cobertura de los casos de corrupción. Estando además la agenda de El Mundo más fragmentada que la de El País. Existen también diferencias en cuanto al porcentaje de atención que ambos medios prestan a los escándalos de corrupción en función del partido involucrado, en cuanto a su duración en la agenda y en cuanto a su visibilidad. Concretamente, El País da más cobertura a los escándalos que afectan al PP y El Mundo a los que afectan al PSOE.²⁵

²⁴ MARTÍNEZ GALLEGO, FRANCESC-ANDREU. Medios de comunicación y escándalos de corrupción en España: ¿denunciantes, magnificadores, cómplices?, *OBETS. Revista de Ciencias Sociales*. Vol. 8, nº1, 2013, pp. 99-126.

²⁵ PALAU, ANNA M. «El impacto de la cobertura mediática de la corrupción en la opinión pública española». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 144, 2013, pp. 97-126.

Vemos que existen vínculos importantes entre los medios de comunicación y la política en España. Los medios informan sobre los principales escándalos de corrupción pero por desgracia están lejos de cumplir con la función de vigilancia que les atribuye una cobertura neutral de la acción del gobierno o de la oposición.

En España, como conclusión, se podrían hacer una serie de recomendaciones para reforzar la función de los medios como agente anticorrupción.

- ♦ La legislación para la competencia debería incluir más medidas específicas para los medios para que fomenten el pluralismo.
- ♦ Los mecanismos de control de los medios de comunicación públicos deben intensificarse para prevenir situaciones de manipulación o sectarismo ideológico.
- ♦ El apoyo legal y financiero a los medios alternativos sin ánimo de lucro es una buena opción también que se debería tener en cuenta en nuestro país.
- ♦ Con respecto a los propios medios y periodistas debe de realizarse una buena autorregulación deontológica que extienda unos buenos estándares profesionales y éticos.

Para finalizar, la capacidad de promover el buen gobierno será posible si los derechos de la prensa se garantizan, la información está disponible para el público y los profesionales, los periodistas están protegidos para ejercer su labor y las organizaciones disfrutan de independencia informativa y estándares éticos. Además serán menos susceptibles de ser capturados por intereses particulares si existe un pluralismo de los puntos de vista, así como un amplio acceso del público a los contenidos informativos.²⁶

²⁶ ARTERO MUÑOZ, JUAN PABLO. «Medios de comunicación, derecho a la información y corrupción», en *La corrupción en España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos*. Barcelona: Atelier, 2016, pp. 109-124.

2. Ética y política frente a la corrupción

Como hemos visto en los puntos anteriores, la corrupción existente en nuestros tiempos es consecuencia de una serie de causas, las cuales han contribuido a extender una visión muy negativa de la política y por extensión, de los políticos. Como soluciones en el terreno ético, se suele abogar a la regeneración ética de la política y condenar los comportamientos ilegítimos de algunos políticos.

Anteriormente hemos definido también desde diversas perspectivas la corrupción, pero ahora la entenderemos en un sentido amplio para analizar las peculiaridades de la misma. Ésta ha gozado de mala reputación a lo largo de la historia ya que muchas veces se adoptan decisiones por medio de engaño o manipulación, por lo que a continuación abordaremos el tema desde una perspectiva ética.

2.1. ¿Podemos relacionar la ética y la política?

La relación entre ética y política ha sido un tema muy debatido a lo largo de las distintas épocas, por lo que para comprender mejor esta relación creemos necesario hacer una breve referencia a los clásicos que han aportado las bases de este problema.²⁷

Platón en *La República* argumentaba que la excelencia política en la sociedad se encontraba en una disposición de la sociedad en la que se llegue a un equilibrio o armonía. Para *Aristóteles* la ética forma parte de la política, identificando el bien del Estado con el del individuo, aunque siendo el Estado más importante que el individuo. Tanto para Platón como para Aristóteles, el objetivo de la política era promover la mejor forma de florecimiento humano a través de leyes orientadas a facilitar una vida buena. El mejor político a su vez era identificado como filósofo que buscase la verdad. Vemos pues cómo

²⁷ Las ideas referentes a los clásicos se han extraído de: IZQUIERDO SANCHEZ, AGUSTÍN Y VILLORIA MENDIETA, MANUEL. «Ética y política» en *Ética pública y buen gobierno. Regenerando la democracia y luchando contra la corrupción desde el servicio público*. Madrid: Tecnos, 2016, pp. 122-124.

desde una visión clásica se concibe a la política como una actividad orientada a coordinar las vidas individuales con el objeto de alcanzar una vida buena y virtuosa.

Posteriormente, fue *Maquiavelo* a quien se le pueden atribuir las bases para aceptar el pluralismo de valores, ya que observó que la política muchas veces contradice a la ética y las razones para apartarse de la moral se fundamentaban básicamente en que el político debe de conseguir el poder en un mundo donde sus competidores no siempre serán buenos, por lo que para conseguir valores como la seguridad y la libertad se puede actuar mal. Esto puede haber influido en la corrupción actual, degradando su contenido.

Esta visión pluralista de los valores en el plano político será muy importante, ya que así se puede atenuar el fanatismo, favorecer la tolerancia conduciendo así hacia el liberalismo.²⁸

Centrándonos en la actualidad, *Adela Cortina* abre ya un amplio debate entre la diferenciación entre ética y política/corrupción al escribir y preguntarse lo siguiente: «La legalidad ligada estrechamente al Estado muestra cada día más sus lagunas e insuficiencias. Los insólitos escándalos de corrupción llevan a sospechar que bien pocos delitos se descubren, los vacíos legales parecen ser oceánicos, la lentitud de los procesos resulta asombrosa, la impunidad de los delitos, llamativa cuando menos, y la intocabilidad de los jueces increíble. ¿No será más fiable potenciar seriamente la moralidad que fiar en la sola legalidad? ¿No será mejor garantía de una sociedad justa apropiarse de actitudes éticas que dejarlo todo al juego de las querellas, las impugnaciones y los recursos? ¿No será más seguro cambiar los hábitos, las convicciones, las costumbres de la sociedad civil que confiar en la clase política?»²⁹

¿Podemos decir que la *moral es previa y externa* a la política? La respuesta a esta pregunta todavía sigue abierta en la actualidad, aunque en general se reconoce que sí que hay lugar para la moralidad en la política pero el problema es decidir el grado de autonomía que caracteriza al pensamiento político, dado que la política tiene una serie de preocupaciones que muchas veces no se pueden reducir a la ética.

²⁸ GARCÍA GUITIÁN, ELENA: «Juicio político y juicio a los políticos: algunas consideraciones sobre la relación entre ética y política», *Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas*, nº 9, 2015, pp. 18-29.

²⁹ CORTINA, ADELA: *Corrupción y ética*. Bilbao: Universidad de Deusto, 1996, citado por: BAUTISTA, ÓSCAR DIEGO: *La ética y la corrupción en la política y la administración pública*, Universidad internación de Andalucía, 2005, pp. 93-97.

Hay que analizar en este momento si el *juicio político* es *diferente o no* al juicio *moral* fruto de esta diferenciación. Y la conclusión a la que se llega es que ambos juicios pueden chocar pero gracias al juicio práctico se decide racionalmente lo que es conveniente en una situación concreta para conseguir un fin bueno y racional. Philp en 2010, hace referencia a que la política debe de velar por los valores fundamentales y mitigar los males posibles, sin embargo cuando los políticos actúan no siempre a partir de un bien se va a producir un bien y un mal otro mal y esto es un dato muy importante ya que de esta situación se deriva el carácter trágico de la política debido sobre todo a la falta de racionalidad en el mundo.

Y de aquí surge el problema conocido como *manos sucias* objeto de interpretación a lo largo del tiempo. El problema de manos sucias supone que en ocasiones es correcto hacer algo incorrecto. Coady lo analiza y trata de interpretarlo, incluso ejemplificándolo con casos extremos³⁰. Este problema puede entenderse acudiendo al concepto de dilema moral y resolver la contradicción pensando que en la situación de manos sucias el agente se enfrenta a dos males y debe escoger el mal menor, por lo que no debe de sentirse culpable por realizar algo incorrecto.³¹

El hecho de realizar algo incorrecto se puede asimilar con la infracción de algunos valores para lograr alcanzar otros. Esta situación se conoce como las *razones de Estado* que comúnmente producen muchas tensiones entre ética y política. A raíz de esto se piensa que en las sociedades actuales para mitigar esta infracción de valores, se necesitan ciudadanos reactivos para reforzar los principios de justicia, capacidad de juicio y que estén dispuestos a participar cuando sea necesario y así mejorarse la situación existente. Se suscita entonces la cuestión de quién debe de ser el responsable de participar y adoptar las decisiones políticas y aquí sí que existe cierta tensión entre las posiciones que enfatizan el liderazgo político y las que otorgan un importante rol a la ciudadanía. En una democracia los juicios de los ciudadanos deberían de tener más peso que los de los responsables políticos. ¿Se está realizando mal entonces?³²

³⁰ Veáse así COADY, «The Problem of Dirty Hands», en *Standford Encyclopedia of Philosophy*, publicado el 29 de abril de 2009.

³¹ IZQUIERDO SANCHEZ, AGUSTÍN Y VILLORIA MENDIETA, MANUEL. «Ética y política» en *Ética pública y buen gobierno. Regenerando la democracia y luchando contra la corrupción desde el servicio público*. Madrid: Tecnos, 2016, pp. 119-155.

³² GARCÍA GUITIÁN, ELENA: «Juicio político y juicio a los políticos: algunas consideraciones sobre la relación entre ética y política», *Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas*, nº 9 2015, pp. 18-29.

Visto este problema, ¿hay una serie de principios que deberían de primar en política? Lo que más se valora en este ámbito como sabemos es la transparencia, la imparcialidad, el uso justo y honesto del dinero público, el rechazo de medios ilícitos...son principios que tienen su base en el valor de la persona y las exigencias morales objetivas del funcionamiento de los Estados. En definitiva, lo importante viene a ser la dignidad de cada persona, la cual solo se salvará si el hombre «consciente de su filiación divina y de la filiación divina de los demás, ve en cada uno de ellos otro yo, cualquiera que fueses el tipo de relación y el ámbito en que se desenvuelva, y muy especialmente en las relaciones de Poder».³³

Así y en la sociedad corrompida en la que nos encontramos se estiman necesarios los Códigos de Buen Gobierno. En España, el Código de Buen Gobierno de 2005 ha sido reformado por la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, considerando entre otros, como altos cargos a los miembros del Gobierno (artículo 1.2.a) de dicha Ley). En la Ley se establecen las incompatibilidades y el deber de servir con objetividad a los intereses generales, como viene establecido además en el artículo 103.1 de la Constitución Española. A modo de control, deben declarar las actividades que hubieran desempeñado los dos años anteriores a la toma de posesión del cargo, estando la Oficina de servicios de intereses (artículo 19) como órgano de vigilancia y control de los altos cargos. Además, se establecen una serie de infracciones para el caso de incumplimiento de las incompatibilidades, o si presentan datos falsos, que pueden consistir en la pérdida de derecho a percibir compensaciones o la restitución de las cantidades percibidas indebidamente.

Analizado esto, ¿podemos decir que la corrupción es un fenómeno meramente jurídico? Podemos afirmar que la corrupción es siempre ilegal pero solo inmoral si el sistema normativo es legítimo desde un punto de vista ético. Sin embargo, desde nuestro punto de vista la corrupción es un fenómeno inmoral pero particular. El elemento de ilegalidad en muchas ocasiones no es decisivo en la corrupción entendida en general ya que hay que analizar también la naturaleza personal de la corrupción y con esto nos referimos a que nos dejamos llevar por la idea moralista de que todo caso de corrupción implica culpabilidad de los corruptores. Sin embargo esto no es así, veamos un claro

³³ GONZÁLEZ PEREZ, JESÚS: *La dignidad de la persona*, Madrid, Civitas Ediciones, 1986, p. 202; GONZÁLEZ PÉREZ, JESÚS: *Corrupción, ética y moral en las Administraciones Públicas*. Cizur Menor: Thomson Civitas, 2006.

ejemplo de un funcionario que actúa obligado por un superior jerárquico no es culpable de su conducta corrupta.³⁴

2.2. *La corrupción y los derechos humanos.*

Llegados a este punto debemos preguntarnos acerca de si los efectos de la corrupción pueden afectar incluso a los derechos humanos. Bien es sabido que la respuesta a esta pregunta es una sencilla afirmación. La corrupción además de ser uno de los principales problemas españoles es una forma de segregación para la sociedad menos favorecida. Ataca los derechos humanos de forma que restringe igualdades y libertades frustrando reparaciones y aprovechándose del desconocimiento de ciertos grupos. En estos casos, se puede establecer cierta responsabilidad al Estado frente a los daños causados por haberse abstenido de realizar aquellos actos que permitan el goce pleno de los derechos a sus ciudadanos, previendo la comisión de delitos que vulneran los Derechos Humanos o tomando las medidas necesarias para sancionar o reparar cuando se ha producido el referido daño.

La corrupción afecta a la mayoría de los Derechos Humanos y concretamente dentro de los derechos sociales, económicos y culturales afecta a la salud, la vida, la educación o la vivienda digna, entre otros.

La conexión entre los derechos humanos y la corrupción radica en la violación de los mismos, a causa de los distintos actos cometidos por agentes estatales, siendo el Estado quien debe evitar el surgimiento del daño, o en caso de que no sea posible su evitación su labor debería de orientarse a investigar y sancionar a quienes sea conveniente.

Respecto al derecho a la vida. De éste en el sentido social, depende el derecho al trabajo, que le asegura a cada persona la oportunidad de ganarse lo necesario para vivir a través de un trabajo digno. A su vez de éste depende el derecho a la educación. Entre estos derechos existe una interdependencia y si se vulnera uno de ellos se vulnerará otro

³⁴ SALCEDO MEGALES, DAMIÁN. «Mala praxis, corrupción y juicios de ética profesional», *Las Torres de Luca*, nº 1, 2012, pp. 115-146.

dado que no hay prevalencia entre ellos. Por esta razón resulta de vital importancia el estudio de la vinculación de la corrupción a los derechos humanos ya que hay que analizar las consecuencias que puede tener ésta para la afectación de los mismos. Una vez establecido dicho vínculo será jurídicamente posible generar responsabilidades directas sobre los involucrados, no solo en el ámbito de la corrupción, sino también el perjuicio ocasionado a un derecho fundamental con objetivos, por supuesto, de reparación.

Concretamente, a los Derechos Humanos se les puede afectar o bien de forma directa o bien de forma indirecta. Nos centraremos en la corrupción política, de la obra pública y privada y en la corrupción económica para ejemplificar la situación.

La corrupción política tiene un impacto muy grave en el proceso democrático, concretamente a la autonomía personal y a la participación política. Las decisiones no se toman atendiendo al interés general, por lo que el principio de la mayoría como rector de la toma de decisiones se destruye.

La corrupción en la obra pública y privada afecta de manera indirecta también a los derechos humanos y consiste tristemente en la pérdida de vidas humanas debido a la baja calidad de los productos utilizados, la reducción de los límites de seguridad o la merma de las cantidades de los elementos constructivos suelen provocar graves accidentes.

Respecto a la corrupción *económica*, se producirá pobreza ya que la corrupción incrementa los precios de los bienes y servicios y pone freno a la competencia. También pone freno al desarrollo de la ayuda humanitaria e incrementa la desigualdad social.

Tenemos que hacer frente por ello de manera efectiva a esta situación y ser conscientes de que la corrupción no solo afecta a bienes económicos sino que puede hacer languidecer a nuestros derechos fundamentales.³⁵

Sin embargo cualquier enfoque de lucha contra la corrupción sin un marco ético resulta inútil, ya que la economía, la política y la ética son los pilares de la estabilidad del sistema por lo que un fracaso de ellos conllevará el fracaso del sistema.³⁶

³⁵ MALEM SEÑA, JORGE F. «Derechos humanos y corrupción», *Revista crítica La corrupción en España*, n° 989, 2014, pp. 48-51.

³⁶ NIETO DE ALBA, UBALDO. «Ética y control ante la corrupción y el blanqueo de capitales». *Revista española de control externo*, vol. 8, n° 23, 2006, pp 13-26.

Vemos como hay una indudable relación entre Derechos Humanos y corrupción y como hemos argumentado entre *corrupción económica y pobreza*, por lo que haremos una breve referencia a la misma.

Es clara la relación directa entre corrupción y PIB per cápita y la inversa entre corrupción y desarrollo humano, así como la relación entre pobreza y corrupción. Es decir, a mayor corrupción menor desarrollo humano y a mayor corrupción más pobreza.³⁷ La literatura sobre los efectos de la corrupción en la economía como sabemos es amplia, basándose sobre todo en los efectos negativos que tiene sobre el crecimiento económico. Es indudable que la mayoría de países con altos índices de percepción de la corrupción, presentan altos índices de pobreza, dado que los recursos destinados a mejorar su calidad de vida son desviados de sus verdaderos fines no cumpliendo su función y dejando retardado el progreso.

Por ello asociaciones a nivel internacional se han dedicado a la investigación de este tema e intentado llevar a cabo soluciones.³⁸

³⁷ ALCAIDE ZUGAZA, LAURA Y LARRÚ RAMOS, JOSÉ MARÍA: «Corrupción, ayuda al desarrollo, pobreza y desarrollo humano», *Boletín Económico de ICE*, nº 2917, 2007, pp. 37-58.

³⁸ CLAVIJO CASTAÑEDA, ANGÉLICA S: «Actos de corrupción como violación a los derechos humanos», *Saber, ciencia y libertad*, nº1, 2012, pp. 35-45.

Conviene hacer una breve referencia a la situación de pobreza que se vive en nuestro país. En España y utilizando datos objetivos, el indicador de riesgo de pobreza y exclusión europeo, AROPE (at risk of poverty or social exclusion), alcanza en 2014, al 29,2% del total de la población, lo que supone un total de 13.657.232 personas. Grecia y España encabezan la lista de países en los que el número de personas amenazadas por la pobreza o exclusión social aumentaron más en 2014 con respecto a 2008. También retroceden los ingresos medios por hogar, lo cual demuestra que es una situación que demuestra el empeoramiento de la realidad social tanto a nivel de renta como de vida en general.



Esta situación conlleva a un malestar generalizado de la sociedad y a la creciente concentración de riqueza en manos de unos pocos, y a su vez una crítica tanto a la democracia como por ende a los partidos políticos que la gobiernan. Por ello se ven claramente dos ámbitos de actuación diferenciados, por un lado se da una clara necesidad de dar respuesta a esta crisis social desde el ámbito político intentando resolver o minimizar la corrupción y así frenar el aumento de la desigualdad que se está produciendo y por otro, se ve una clara necesidad de regeneración política e institucional que podemos relacionar con una política más transparente y participativa.

En los discursos de los partidos políticos es claro el llamamiento generalizado que hacen a la *regeneración política*, pero que todavía está por verse en la realidad. La emergencia de nuevos partidos como Podemos, Ciudadanos o las CUP en Cataluña han favorecido a que se establezca una contraposición con la vieja política, se identifican con partidos que dan más protagonismo a la participación, la deliberación o al consenso, al menos en un principio. Sin embargo, está demostrado que los dos grandes partidos tradicionales en términos de exclusión social no han sido capaces de dar respuestas efectivas, alejándose de la toma de iniciativas de carácter social. En fenómenos como los desahucios o la burbuja inmobiliaria podemos apreciar la incapacidad de nuestros

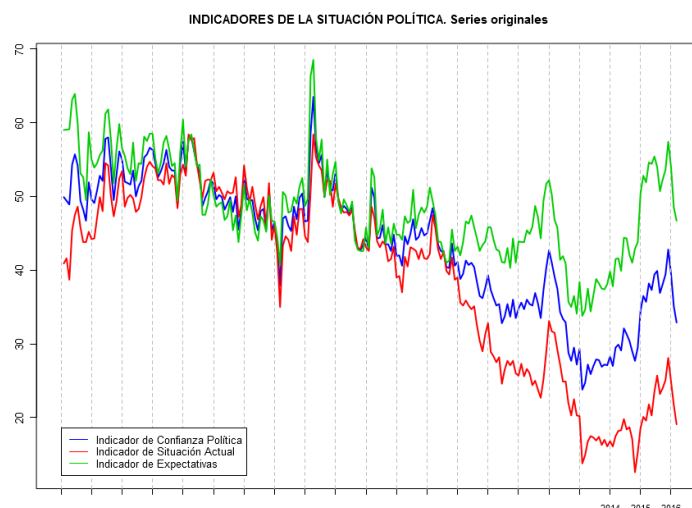
partidos tradicionales para anticipar las propuestas políticas. Si bien algunos partidos han incorporado medidas concretas para la lucha de la pobreza y la exclusión, las mayores partes de los discursos se centran en votantes de clase media para que recuperen la confianza en las instituciones y en los partidos políticos, lejos de acabar con esta situación.

2.3. Transparencia, principal remedio jurídico frente a la corrupción.

Actualmente se está dando mucha importancia a las políticas de transparencia para hacer frente a la corrupción española, por lo que analizaremos la problemática existente en esta materia y como está la situación.

Sentando las bases del conflicto cabe decir que en España existe una *crisis de legitimidad*, que se puede fundamentar en tres partes: la conformidad del poder con las normas, la conformidad de las normas con el sistema de creencias y la expresión del consentimiento por parte de los subordinados al poder. Por ello, las instituciones deben de seguir unas leyes, pero si no lo hacen y se produce un conocimiento público de las normas se generará la actual indignación en la ciudadanía. Por ello la transparencia goza de gran importancia en todo este entramado corrupto y de ahí el deterioro de los partidos políticos y los respectivos dirigentes³⁹. El problema viene en España cuando se da una distancia entre cómo creen nuestros representantes que deben actuar y cómo los ciudadanos queremos que nos representen. A continuación, veremos algunos *datos* sobre la deslegitimación creciente en España. Para ello, es suficiente analizar los indicadores del barómetro del CIS sobre la evolución de la situación política española, siendo la corrupción y los políticos uno de los problemas más graves del país. Esta creencia va correlacionada con la creencia de que la economía va mal o muy mal. Además, la desconfianza hacia las instituciones públicas no ha hecho más que expandirse.

³⁹ VILLORIA MENDIETA, MANUEL. «La transparencia como política pública en España: algunas reflexiones», *Eunomía, Revista en Cultura de la Legalidad*, n°7, 2014, pp. 85-103.



Fuente: barómetro del CIS

Por ello, a modo de conclusión, como hemos visto, una buena solución sería la *transparencia* comentada con anterioridad de coste relativamente bajo. Permitiría detectar los casos de corrupción existentes y desincentivaría las actividades corruptas. Además, la transparencia tendría efectos beneficiosos en el mundo de la economía, principalmente porque los costes de transacción se disparan con la opacidad. Además de que la transparencia se correlaciona con la riqueza per cápita. La apuesta por la transparencia como vemos es una apuesta por el crecimiento económico, la inversión y la eliminación de la corrupción.

Sin embargo, esta transparencia solo puede funcionar si verdaderamente existe un interés político en que la haya y además se apoya en una eficaz *rendición de cuentas*.

Es el momento por ello de conectar la gestión por resultados con las políticas de gobierno abierto, que se busque la participación ciudadana y su colaboración en el control de los objetivos y del gasto público, que se evalúen los resultados e impactos con participación de los afectados, que se transparenten los marcos conceptuales y metodológicos de las políticas y programas de gasto y que se gestione el control de forma orientada al aprendizaje.⁴⁰

⁴⁰VILLORIA MENDIETA, MANUEL. «La transparencia como política pública en España: algunas reflexiones», *Eunomía, Revista en Cultura de la Legalidad*, nº7, 2014, pp. 85-103.

Conclusiones

Recordemos que la *corrupción* es un abuso de poder con un beneficio indirecto o directo para el corrupto o los grupos de los que forma parte éste, con incumplimiento de normas jurídicas o de las normas éticas que una comunidad asume como válidas, y donde el actor corrupto siempre pone por delante el interés privado sobre el interés general, existiendo tanto en regímenes democráticos como en regímenes dictatoriales, dependiendo la gravedad de la misma de los propios dirigentes del sistema.

Esta situación en España se ha producido por una serie de causas económicas, sociales, políticas, psicológicas e incluso implícitamente por el propio ordenamiento jurídico español que ha permitido en cierta forma esta situación.

Un tema muy polémico en la corrupción política española ha sido como hemos visto, la financiación de los partidos políticos, que si bien se ha avanzado en este tema, todavía quedan lagunas importantes, ya que siguen sin prohibirse ciertas actividades debido en cierta forma a la reticencia por parte de los políticos de terminar con esta situación, siendo de gran importancia las políticas de transparencia para mitigar esta situación.

Sin embargo, el tema de la corrupción política suele abordarse mediante la legalidad, siendo conveniente potenciar la moralidad y no solo la modificación constante de leyes. Se debe garantizar una sociedad justa adoptando actividades éticas y no solo dejar el tema al azar de querellas, impugnaciones o recursos. Todo esto sería posible si se confiara en los juicios de los ciudadanos que luchen por valores como la justicia, la imparcialidad o la transparencia.

Pero como esta situación no se da en la realidad, la corrupción ha llegado a afectar a la mayoría de los Derechos Humanos como los derechos a la salud, la vida, la educación o la vivienda digna, entre otros, afectando además a la pobreza y exclusión social de la ciudadanía española.

Para finalizar pasaremos a analizar una serie de propuestas para luchar contra la corrupción.

Siendo sinceros, erradicar la corrupción es tarea difícil. Se debe atacar a la raíz del problema para conseguir un mínimo atisbo de luz. ¿De qué nos sirven las leyes sobre transparencia o el buen gobierno si la educación de la sociedad sigue siendo la misma, y por ende los españoles siguen siendo corruptos?

Las técnicas que se utilizan para combatir la corrupción suelen estar instrumentalizadas en medidas legislativas, ejecutivas y sociales, siendo todas ellas técnicas complejas, pero la falta de intención sincera es su mayor obstáculo hacia el éxito.

Lo primero que debemos de hacer para combatir la corrupción es reducir las ocasiones de que se produzca, y así evitar las tentaciones, sin embargo, al fin y al cabo el Gobierno es el primer interesado en que la corrupción no sea perseguida al estar cometida por quienes ocupan el poder. Es decir, la mejor política anticorruptiva es la de *prevención*.

Lo interesante de una política preventiva es que se desarrolla más en la sociedad que en el propio Estado, ya que la corrupción es un fenómeno social que se manifiesta en el ámbito estatal. Como hemos comentado en el epígrafe sobre causas de la corrupción, una de ellas son las causas éticas que provenían de la pérdida generalizada de los valores. Sin embargo, este es un ámbito complejo de solucionar porque de la misma manera que la sociedad no se corrige por decreto sino por convicciones, éstas no se implantan con conferencias ni congresos, por lo que es necesario por difícil que parezca, un cambio de mentalidad en la sociedad y así conseguir una sociedad totalmente renovada.

Desde esta perspectiva ética, lo que se han ido implementando son los códigos de conducta, pero que en muchos casos, solo sirven para tranquilizar la conciencia de los gobernantes que los han hecho y en muchas ocasiones se consideran liberados de rendir cuentas. Por tanto es muy importante llevar a cabo acciones políticas con reforzamiento de la prevención y por ende, de los valores democráticos.

Si las soluciones éticas no consiguen resultados positivos se debe de pasar a remedios *pedagógicos* y con ellos tratar de convencer a los ciudadanos de los riesgos de la corrupción y las ventajas de la honestidad política, por lo que creemos necesario convencer a los ciudadanos de los perjuicios reales e inmediatos de la corrupción.⁴¹

⁴¹ NIETO, ALEJANDRO: «Lucha anticorrupción» en *Corrupción en la España democrática*, Barcelona: Ariel, 1997, pp. 203-245.

Otra opción para combatirla y que es la más común es la *represión penal* que se halla en manos de los jueces y de su independencia, pero consideramos la prevención de mayor importancia que la represión de actividades ya realizadas.

Respecto a las *vías legales* que deberían modificarse, podemos comenzar haciendo referencia al fortalecimiento institucional y que se garantice una auténtica independencia judicial y autonomía del CGPJ, tantas veces cuestionada, como se comentará a continuación.

Tema de gran relevancia son los *aforamientos e indultos*⁴². Se debe acometer una revisión de ambos. Hoy por hoy, el Poder Judicial no es independiente del Ejecutivo, ya que este último elige a la cúpula de los jueces del CGPJ y éstos a los miembros del Tribunal Supremo, TSJ, Audiencias...por lo que la corrupción aparece en un Estado en el cual tiene el Poder Judicial a su favor. Esto ha generado una sensación generalizada en la ciudadanía de politización de la justicia, bastante difícil de eliminar. Por lo que es urgente acometer la reforma del CGPJ democratizando el sistema de acceso a los cargos para así garantizar su independencia y acabar efectivamente con la corrupción y la desconfianza de los ciudadanos.

Respeto al *aforamiento*. Durante los últimos años es una cuestión muy discutida por la opinión pública. Recordemos que un aforamiento es la garantía procesal penal, a través de la cual se instrumentan la inmunidad y la inviolabilidad penales y se concretan en la alteración de las reglas ordinarias de determinación del juez legal previsto por la ley al atribuirse la jurisdicción sobre causas penales a los órganos jurisdiccionales de orden superior. Actualmente, es necesaria una reducción de esta figura por medio de una modificación legislativa por parte de Diputados y Senadores (a quienes se les aplica), lo cual si se llevara a cabo se mostraría un deseo de cambio por su parte más claro.

Deberían limitarse además, los aforamientos a Jefes de Estado y Presidentes del Gobierno, ya que actualmente como se regulan en España, vulneran el principio de igualdad procesal del artículo 14 de la Constitución Española. Si no se lleva a cabo la reforma, los ciudadanos españoles van a seguir manteniendo el sentimiento de que el poder es impune y de que la igualdad solo se aplica a los más desfavorecidos.

⁴² Respecto a aforamientos e indultos nos hemos basado en las ideas principales que se exponen en: DOLADO PÉREZ, ÁNGEL: «Fueros especiales, indulto y corrupción» en *La corrupción en España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos*, Barcelona: Atelier, 2016, pp. 497-515.

Respecto a los *indultos*, que tienen como finalidad resocializar al condenado rehabilitando su prestigio social. Pese a que todos los partidos políticos han tenido ocasión de suprimirlo no lo han hecho y esto ya dice mucho. En los últimos años se han concedido gran número de indultos lo cual está provocando una enorme alarma social, incluso su numerosa aplicación puede suponer un ataque a la independencia judicial. Ya solo con lo dicho hasta ahora, se ve una reforma necesaria de la Ley del Indulto adaptándola a los principios constitucionales vigentes en un Estado de Derecho y por supuesto, su concesión o denegación deben de ser motivadas en todo caso y susceptibles de control parlamentario y jurisdiccional. La supresión de la exigencia de motivación irá contra el artículo 9.3 de la CE que prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos.

Por tanto, si ponemos en marcha medidas educativas, potenciamos la moralidad y tratamos de garantizar una sociedad justa adoptando actividades éticas, podemos «crear» ciudadanos justos, imparciales y transparentes que junto al apoyo legal, luchen activamente contra la corrupción y sean capaces de liderar un Gobierno sin caer en sus manos.

Bibliografía

ALCAIDE ZUGAZA, LAURA Y LARRÚ RAMOS, JOSÉ MARÍA (2007): «Corrupción, ayuda al desarrollo, pobreza y desarrollo humano», *Boletín Económico de ICE*, nº 2917, pp. 37-58.

ARTERO MUÑOZ, JUAN PABLO (2016). «Medios de comunicación, derecho a la información y corrupción», en *La corrupción en España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos*. Barcelona: Atelier, pp. 109-124.

BAUTISTA, ÓSCAR DIEGO (2005). *La ética y la corrupción en la política y la administración pública*, Universidad internación de Andalucía, pp. 93-97.

CARASSALE, SANTIAGO (2013): «Corrupción», *Eunomía. Revista en cultura de la legalidad*, nº4, pp. 172-178.

CLAVIJO CASTAÑEDA, ANGÉLICA S (2012): «Actos de corrupción como violación a los derechos humanos», *Saber, ciencia y libertad*, nº 1, pp. 35-45.

DOLADO PÉREZ, ÁNGEL (2016): «Fueros especiales, indulto y corrupción» en *La corrupción en España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos*, Barcelona: Atelier, pp. 497-515.

DELGADO GODOY, LETICIA M. (2015): «Narcisismo y representación democrática en España», *Methaodos. Revista de ciencias sociales*, nº3, pp. 49-63.

GARCÍA GUITIÁN, ELENA (2015): «Juicio político y juicio a los políticos: algunas consideraciones sobre la relación entre ética y política», *Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas*, nº 9 pp. 18-29.

GONZÁLEZ PEREZ, JESÚS (1986). *La dignidad de la persona*, Madrid: Civitas Ediciones, p. 202.

GONZÁLEZ PÉREZ, JESÚS (2006). *Corrupción, ética y moral en las Administraciones Públicas*. Cizur Menor: Thomson Civitas.

- IZQUIERDO SANCHEZ, AGUSTÍN Y VILLORIA MENDIETA, MANUEL (2016): «Ética y política» en *Ética pública y buen gobierno. Regenerando la democracia y luchando contra la corrupción desde el servicio público*. Madrid: Tecnos, pp. 119-155.
- JIMÉNEZ ASENSIO, RAFAEL (2016): «España, ¿un país sin frenos?» en *La corrupción en España: ámbitos, causas y remedios jurídicos*, Barcelona, Atelier, pp. 17-46
- MALEM SEÑA, JORGE F (2014). «Derechos humanos y corrupción», *Revista crítica La corrupción en España*, nº 989, pp. 48-51.
- MARTÍNEZ GALLEGO, FRANCESC-ANDREU (2013). «Medios de comunicación y escándalos de corrupción en España: ¿denunciantes, magnificadores, cómplices?», *OBETS. Revista de Ciencias Sociales*. Vol. 8, nº1, pp.99-126.
- NIETO, ALEJANDRO (1997): «Lucha anticorrupción» en *Corrupción en la España democrática*, Barcelona: Ariel, pp. 203-245.
- NIETO DE ALBA, UBALDO (2006). «Ética y control ante la corrupción y el blanqueo de capitales». *Revista española de control externo*, vol. 8, nº 23, pp 13-26.
- ORDOÑEZ PÉREZ, DAVID (2012): «La financiación de los partidos políticos en España: corrupción y deslegitimación», *Estudios*, nº2-2, pp 19-26.
- PALAU, ANNA M. (2013) « El impacto de la cobertura mediática de la corrupción en la opinión pública española». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 144, pp. 97-126.
- PECES BARBA, GREGORIO (1996): «La corrupción en las Instituciones y en la sociedad civil» en: *Corrupción y ética*. Bilbao: Universidad de Deusto, pp. 19-28.
- RIDAO MARTÍN, JOAN (2014). «La transparencia y el control económico-financiero de los partidos políticos en España. Entre un balance decepcionante y un futuro sombrío.» *Cuadernos Manuel Giménez Abad*, nº7, pp. 211-248.
- SALCEDO MEGALES, DAMIÁN (2012): «Mala praxis, corrupción y juicios de ética profesional», *Las Torres de Luca*, nº 1, pp. 115-146.
- SORIANO, RAMÓN (2011): «La corrupción política: tipos, causas y remedios». *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, Nº 45, págs. 382-402.

TARÍN, CARLOTA (2016): «La medición de la corrupción en España: los datos objetivos» en *La corrupción en España: ámbitos, causas y remedios jurídicos*. Barcelona: Atelier, pp. 67-82.

VAQUER CABALLERÍA, MARCOS (2016): «Corrupción pública y ordenamiento jurídico», en *La corrupción en España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos*. Barcelona: Atelier. pp. 125-138.

VILLORIA MENDIETA, MANUEL (2014): «Corrupción pública», *Eunomía, revista en cultura de la legalidad* nº 5, pp. 159-167.

VILLORIA MENDIETA, MANUEL (2014). «La transparencia como política pública en España: algunas reflexiones». *Eunomía, Revista en Cultura de la Legalidad*, nº7, pp. 85-103.

VILLORIA MENDIETA, MANUEL (2015): «La corrupción en España», *Revista de Servicios Sociales y Política Social*, volumen XXXII, pp. 77-100.

VILLORIA MENDIETA, MANUEL (2016): «Principales Rasgos y características de la corrupción en España» en *La corrupción en España: ámbitos, causas y remedios jurídicos*. Barcelona: Atelier, pp 47-66.

ZARZALEJOS, JOSÉ ANTONIO (1996): «Descripción del fenómeno de la corrupción», en *Corrupción y ética*, Bilbao: Universidad de Deusto, pp 12-17.

Fuentes documentales

DE ROJAS, CRISTINA: «Quién es quién en los casos más sonados de corrupción del PP», *El Mundo*, 23-10-2014.

UNDP (United Nations Development Program) and Global Integrity (2008): *A User's Guide to Measuring Corruption*. Oslo, UNDP Oslo Governance Center.

Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de

Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
Publicado en: «BOE» núm. 77, de 31 de marzo de 2015, páginas 27186 a 27215

Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Publicado en: «BOE» núm. 77, de 31 de marzo de 2015, páginas 27259 a 27277.

Barómetro del CIS de enero de 2016.

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/11_barometros/Indicadores_PI/politica.html,
consultada el 9/4/2016

PRATS, JAIME: «La población en riesgo de pobreza o exclusión social crece hasta un 29%», *El País*, 26-5-2015.

http://economia.elpais.com/economia/2015/05/26/actualidad/1432626857_809310.html,
consultado el 25/4/2016.

